

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 28

7 de marzo de 2016

Pág. 29

E insta al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con el sector, con las organizaciones y asociaciones más representativas en sus respectivos ámbitos de actuación, estatal y autonómico, con el objetivo de avanzar de forma adecuada, en la compatibilidad de la percepción de una pensión de jubilación con rendimientos del trabajo procedentes de actividades profesionales relacionadas con la cultura y el arte, para facilitar y fomentar la actividad de escritores y artistas mayores, y reconocer su contribución intelectual y cultural a la sociedad.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2016.—**Francesc Homs Molist**, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).

161/000143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa al mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa Elcogas y el desarrollo de plan de empleo para la comarca de Puertollano.

Exposición de motivos

Puertollano y su comarca son el principal motor industrial de Castilla-La Mancha. La crisis económica entre otros ha motivado que se esté sufriendo un grave deterioro y retroceso en la apuesta tecnológica e innovación. Situación que ha provocado una pérdida importante de empresas y puestos de trabajo.

Esta ciudad ha sido desde hace mucho tiempo referente energético y de gran aportación por la energía eléctrica procedente de la utilización de carbón autóctono. La Central de Elcogas ya está preparada medioambientalmente para quemar carbón de forma limpia, reduciendo al máximo las emisiones de CO₂.

Elcogas, se encuentra en grave riesgo de desaparecer ya que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), autorizó el cierre solicitado por la empresa el 1 de junio de 2014. Aunque tras la movilización social y sindical, la empresa Elcogas solicitó una prórroga para poder presentar un plan de viabilidad el pasado 30 de octubre de 2015, en el que mostraron la posibilidad de hibridar la Central incorporando un 30% de biomasa como materia prima, la empresa solicitó un aplazamiento de la desconexión física de la planta con el fin de elaborar dicho plan, el MINETUR concedió un aplazamiento extraordinario y por única vez de tres meses (resolución de 30 de octubre de 2015, de la DGPEM), plazo que finalizó el pasado 31 de enero de 2016. El plan de viabilidad se presentó el 22 de diciembre de 2015.

La coyuntura política actual, con un Gobierno en funciones, precisa de voluntad política para resolver y dar solución a la petición de continuidad y evitar así el cierre. Los principales partidos políticos que concurrieron a las diferentes elecciones: municipales, regionales y estatales durante 2015, han manifestado su apoyo a empresas como Elcogas que son más que una empresa, un laboratorio de nuevas tecnologías un centro de cooperación y colaboración con los Centros Tecnológicos, Universidades y un referente mundial en la quema de carbón de forma limpia que además está en permanente estudio para incorporar y resolver problemas que tenemos en la sociedad como son: los residuos sólidos urbanos, la biomasa, los neumáticos y un largo etcétera.

Elcogas tiene un amplio apoyo social, demostrado en la calle por la ciudadanía, los sindicatos, las asociaciones y colectivos tecnológicos y culturales. Hay que hacer caso a la ciudadanía que con sus manifestaciones y sus votos refrendaron lo que los programas políticos contenían, y todos ellos contemplaban la casuística y problemática de Elcogas.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Tomar las medidas pertinentes para la protección de los puestos de trabajo de la empresa Elcogas.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 28

7 de marzo de 2016

Pág. 30

2. Impulsar un plan específico para garantizar el empleo estable y la viabilidad social y económica para Puertollano y su comarca.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2016.—**Ana Marcello Santos**, Diputada.—**Íñigo Errejón Galván**, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000140

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario GP-POD-EC-En Marea, a iniciativa de su Portavoz adjunta Alexandra Fernández Gómez y las Diputadas y Diputados Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernán Vello conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para ser debatida en Comisión, relativa a la pretensión de ampliar las instalaciones de la planta de gas de Reganosa.

Exposición de motivos

La estafa ciudadana que perpetran las empresas energéticas con la complicidad del Gobierno en funciones ronda a estas alturas la enorme cifra de 30.000 millones de euros. Esa deuda, ejemplo de deuda ilegítima, viene causada por la burbuja energética que los gobiernos del PP no cesan de nutrir con decisiones contrarias al interés general. El último escalón de esa mala práctica es la pretensión de ampliar las instalaciones y capacidades de regasificación de la planta de Reganosa, sita en el interior de la ría de Ferrol, que a modo de espada de Damocles, representa una amenaza a la seguridad de miles de personas. La construcción de un tercer tanque de carga que pueda almacenar 150.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL), de un segundo brazo surtidor de buques en el muelle de atraques y la dotación de otro vaporizador para duplicar la capacidad de regasificación son los elementos claves del proyecto.

Con esta pretensión, la Xunta de Galicia, socia de la planta —posee el 17,5% de las acciones— y firmante de un execrable convenio secreto datado en el tiempo de la presidencia de Manuel Fraga, sigue trabajando en favor de los intereses personales de un grupo empresarial.

Lo hace desconsiderando el interés general, la necesidad de cuidar la legalidad, la seguridad y los recursos públicos de la ciudadanía. Lo hace a pesar de saber que la planta de gas de Reganosa es una instalación ilegal (según sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2012), peligrosa —porque amenaza la vida de miles de personas— y onerosamente superflua, ya que nos cuesta cerca de 60 millones de euros anuales por déficit contable.

La demanda de gas para la generación eléctrica y para consumo convencional desciende de forma continuada desde el año 2008. La producción anual de la planta de gas de Reganosa va disminuyendo progresivamente desde su puesta en funcionamiento (según consta en el informe de Enagas del 2014). La ratio de utilización de la planta de Mugaros sigue disminuyendo cada año, siendo en el 2014 del 28.6%.

A pesar de la escasa producción de Reganosa, a pesar de que la demanda de consumo de gas no se prevé que suba si no que baje, los promotores de Reganosa pretenden duplicar la capacidad de regasificación de la planta, argumentando una necesidad ficticia de gas para justificar un aumento de la capacidad de producción. No hay más motivo que conseguir una mayor retribución fija, ya que el sistema gasístico del estado español, retribuye a las empresas del sector en función de la capacidad de producción otorgada, no de la producción real. De ahí la burbuja de un mercado energético de libre concurrencia.

Las empresas del sector energético, con la complicidad de los gobiernos autonómicos, vienen realizando la construcción de infraestructuras energéticas, lejos de cualquier tipo de planificación razonable, sumando una capacidad de generación eléctrica que duplica las necesidades del país y que deberán ser pagadas por la ciudadanía. Según estudiosos del tema, el volumen de beneficio del oligopolio de las cinco empresas energéticas en los últimos diez años, alcanzó los 40.000 millones de euros. La ampliación propuesta de una planta que ya nos ha costado alrededor de 500 millones de euros supondría incrementar ese coste anual, que se incrementaría al abonarse con dinero público la capacidad instalada,